JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO No. COP-SAMC-100-2025

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO:

NÚMERO	COP-SAMC-100-2025
TIPOLOGÍA	Contrato de Obras Publica
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONTRATISTA	INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT / C.C.	900.940.240-9
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GALDAMEZ SECTOR ROSA DEL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU-884 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/05/2025
FECHA DE INICIO	23/05/2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 / AGOSTO / 2025
PRORROGA	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($93.977.422,00).
ADICIÓN	N/A
ORDENADOR DEL GASTO	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO	ALCALDE

2. DATOS ACTUALES DEL CONTRATO:

VALOR PAGADO	CERO PESOS M/CTE ($0,00)
SALDO ACTUAL	NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($93.977.422,00).
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO**
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

3. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: La presente modificación será objeto de:

Adición	X
Prorroga	X
Suspensión	N/A
Cesión	N/A
Modificación	N/A

4. JUSTIFICACIÓN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Respecto de las modificaciones que pueden realizarse a los contratos estatales regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló:

"2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

2.6.1. *Por regla general,* ***los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado****, a los cuales sirve el contrato [1]Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la* ***sentencia C-949 de 2001*** *–la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal] Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en* ***concepto del 13 de agosto de 2009****:*

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que ***la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo****. Por*

mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.[1]

2.6.2. *La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza* ***incompletos****, es decir,* ***(i)*** *los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y* ***(ii)*** *en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben* prestar *los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.*

En este respecto, la Sala de Consulta en el concepto citado explicó en relación con la mutabilidad de los contratos de concesión de servicios públicos:

"Es claro que al cambiar el entorno en que se desenvuelve la prestación de un servicio público a la comunidad, en forma tal que afecte gravemente dicha prestación, independientemente de su previsibilidad, deben mutar las obligaciones del contrato que tienen que ver con tales cambios, o de lo contrario se estaría dando un servicio inadecuado a las nuevas realidades sociales, culturales o tecnológicas.

La realización del ideal de progreso también conlleva la necesidad de variar los contratos de concesión con miras a obtener la mayor satisfacción posible de las necesidades de la colectividad; fenómeno que ha sido estudiado desde antaño y a él se refieren los ejemplos transcritos anteriormente, dados por los autores Pareja y Sarria. Hoy en día, la literatura jurídica habla de una cláusula presunta de progreso en los contratos de concesión de servicio público, haciendo especial énfasis en los cambios o adelantos tecnológicos. Como lo explica el argentino Juan Carlos Casagne, en esta frase: 'En nuestra opinión, el principio de mutabilidad del servicio público debe desenvolverse con arreglo a los principios de calidad y eficiencia (art. 42 CN) y la cláusula de progreso (art. 75, inc. 18, CN) que tipifica, positivamente, el objetivo de bien común como fin del Estado.'

En esta perspectiva doctrinaria, ***la mutabilidad constituye un principio interpretativo de los contratos estatales*** *de especial trascendencia en la concesión de servicio público"* (negrilla fuera del texto).

2.6.3. *En el caso colombiano, la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato. En este sentido y en relación con la interpretación del artículo 16 de la ley 80, la Sala de Consulta aseveró:*

"Un comentario inicial de este artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la modificación del contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la afectación grave del servicio público, ***y los procedimientos son dos: el común acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel.*** *No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones"* (negrilla fuera del texto).

2.6.4. *Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que* ***la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.****- La Sala de Consulta explicó:*

"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.

Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.

De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que ***toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes****"* (negrilla fuera del texto).

2.6.5. *Es posible que la modificación sea necesaria, aunque sea consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria correspondiente. Al respecto, la Sala de Consulta en el concepto en cita indicó:*

"Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave del servicio, de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de servicios públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación, (…)".

2.6.6. *Por último, es preciso resaltar que* ***la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico****, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.*

Respecto de los elementos accidentales del contrato estatal, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha determinado que el **plazo de ejecución** es un elemento accidental del contrato -no de su esencia ni de su naturaleza- y, por ello puede ser materia de modificaciones. Frente al particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en **sentencia del 24 de agosto de 2005**, afirmó:

"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato."

Lo mismo ocurre con el **precio**, cuya adición, de conformidad con esta misma providencia, es además expresamente autorizada por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial del acuerdo contractual.

En lo que se refiere al **objeto del contrato estatal**, existe un amplio debate jurisprudencial, como la Sala destacó al examinar su competencia para ocuparse de la demanda bajo estudio. En efecto, con fundamento en el artículo 58 del Decreto Ley 222 de 1983 que disponía: "*En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si estuviese vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas*", la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en **concepto del 15 de marzo de 1990**–antes de la expedición de la ley 80- sostuvo:

"De la lectura de esta norma se deduce claramente que el legislador extraordinario denominó equivocadamente contratos adicionales a las modificaciones del plazo y del valor de los contratos administrativos, pues estas son simples reformas que no implican cambio radical en el contrato.

Sólo cuando ***se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales****, porque ello implica una modificación fundamental del convenio inicial. Por lo mismo, debe entenderse que cuando la norma se refiere a la celebración de un contrato adicional por modificación del plazo o del valor se está frente a una mera reforma del contrato. Y que* ***se celebra un contrato adicional cuando las partes contratantes acuerdan*** *una modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato; como por ejemplo cuando en un contrato de obras públicas se pacta la construcción de un determinado tramo de una carretera y una vez en ejecución se determina que el tramo debe ampliarse; ese cambio obviamente redunda en la modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato principal, lo que conlleva necesariamente la celebración de un contrato adicional"* (negrilla fuera de texto).

Luego de la entrada en vigencia de la ley 80, en **concepto del 17 de mayo de 1994**, la Sala de Consulta y Servicio Civil afirmó que bajo la vigencia del decreto 222 de 1983, las prórrogas y adiciones de los contratos administrativos solamente podían versar sobre el plazo y el precio, y que, por el contrario, las reformas del objeto era auténticos contratos adicionales, es decir, nuevos negocios jurídicos. La Sala explicó:

"2) El artículo 58 del Decreto - Ley 222 de 1983 contemplaba la posibilidad de modificar los contratos que regulaba en cuanto al plazo y al precio; pero a la vez prescribía que no podrán 'pactarse prórrogas automáticas' (inciso 6o. ibídem). Además, aunque la mencionada disposición se refería en su epígrafe a 'los contratos adicionales', en realidad no regulaba las adiciones a los mismos sino su reforma en relación con el plazo y el precio. Las adiciones, por lo mismo, debían ser objeto de nuevos contratos.

La misma disposición, teniendo en cuenta que la reforma de los contratos implicaba un nuevo acuerdo de voluntades, que debía completar el contrato, disponía que para efectuarla se debía suscribir 'un contrato adicional' que en realidad era una reforma del original. De donde se infiere que la reforma del contrato, que autorizaba el artículo 58 del Decreto - Ley 222 de 1983, necesariamente implicaba un nuevo acuerdo de voluntades, diferente del contrato original.

(…).

3) Si el tránsito de legislación implica que los contratos ya celebrados y en vigor se rigen por las correspondientes cláusulas contractuales y ***'las Leyes vigentes al tiempo de su celebración'*** *(la Sala destaca), las reformas o adiciones a esos mismos contratos, en cuanto implican nuevos acuerdos de voluntades, no se rigen por los artículos 38 de la Ley 153 de 1887 y 78 de la Ley 80 de 1993, sino por la nueva legislación: si la ley garantiza los convenios o contratos celebrados, para que se rijan por la ley vigente en la fecha de su perfeccionamiento, los nuevos convenios, adiciones reformas o prórrogas de los mismos, no están comprendidos por este tratamiento de excepción y se rigen por la nueva legislación. La mejor prueba de ello consiste en verificar que las prórrogas, reformas o adiciones de los contratos se pueden convenir o no, sin que ellos pierdan su propia entidad; lo que*

permite concluir que las reformas y adiciones son sobrevinientes o posteriores al contrato original" (negrilla original).

Posteriormente, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la **sentencia del 24 de agosto de 2005,** indicó:

"Además, en dicha disposición [artículo 40 de la ley 80] se estableció claramente que cualquier estipulación de las partes contratantes, que tenga relación directa con el objeto del contrato Estatal, debe llevarse a cabo a través de la firma de un nuevo contrato, lo cual se deduce de dicha formulación normativa, donde la adición del contrato, que es distinta del contrato adicional, se admite expresamente para adicionar su valor no más allá del 50% del valor inicial del contrato, no para modificar su objeto, puesto que este elemento esencial de los contratos tan solo puede sufrir mutaciones por vía del contrato adicional. Esto se deduce de lo normado en las siguientes disposiciones de la misma Ley 80 de 1993: [artículos 16 y 41 de la ley 80]

(…)

Sin duda, la modificación del objeto del contrato debe surtirse por vía de un contrato adicional y prueba de ello es que se entiende perfeccionado un contrato cuando existe acuerdo respecto del objeto y del precio y dicho acuerdo se eleva a escrito. No desconoce la Sala que la adición del contrato por modificación del objeto puede conllevar al incremento del valor del precio inicialmente pactado, pero no es a esta modificación del valor a la que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pues tal interpretación llevaría al enfrentamiento de las disposiciones analizadas, lo que en aplicación del principio del efecto útil de las normas conduce a colegir que la reforma de precios aludida en ese parágrafo es aquella surgida de mayores cantidades de obra ya ejecutadas o cuando de imprevistos en la ejecución del contrato se trata.

Tan cierto resulta ser que la modificación del objeto del contrato debe surtirse por vía de un contrato adicional, que por estar en presencia de un nuevo objeto (no puede ser el mismo objeto aquel que ha sido modificado por adiciones), debe existir un nuevo acuerdo de voluntades que lo determine y que de paso fije el precio que por el mismo cancelará la administración; además, por tratarse de un objeto adicionado, en el que la prestación debida ya no es la misma por haber sido ampliada, es claro que las garantías constituidas por el contratista para el contrato inicial no cubren ese nuevo objeto, respecto del cual no puede llamarse a responder al garante, siendo necesario que sobre dicho objeto adicional se constituyan las garantías previstas en la Ley."[1]

4.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO

1. El Municipio de Subachoque, en cumplimiento de su compromiso con la comunidad y con el desarrollo planificado y sostenible, identificó la necesidad de mejorar la movilidad en la vereda Galdámez, sector Rosa del Páramo, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial. En atención a lo anterior, se gestionó y suscribió el

[1] Tomado de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82886

Convenio ICCU-884 de 2024 con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, del cual se deriva el Contrato de Obra COP-SAMC-100-2025, celebrado el día 16 de mayo de 2025 entre el Municipio de Subachoque (NIT 899.999.314-7) y la firma INTEXE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (NIT 900.940.240-9), cuyo valor es NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($93.977.422,00) y objeto contractual consiste en "Contratar las obras para el mejoramiento de la vía que comunica del casco urbano a la vereda Galdámez sector Rosa del Páramo en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, en el marco del Convenio ICCU-884 de 2024."

2. El día 23 de mayo de 2025 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra COP-SAMC-100-2025, dando apertura formal a la ejecución de las actividades previstas en el objeto contractual.
3. El día 21 de agosto de 2025, el señor Camilo Albeiro Torres Peña, en su calidad de representante legal de Intexe Consultoría y Construcciones S.A.S., remitió comunicación formal mediante la cual solicitó la prórroga del Contrato de Obra COP-SAMC-100-2025 por un término de quince (15) días calendario, es decir, hasta el día 5 de septiembre de 2025, argumentando razones técnicas y operativas que sustentan dicha solicitud.
4. Que, el día 22 de agosto, se suscribió la prórroga al contrato COP-SAMC-100-2025 fijando como fecha de terminación el día 06 de septiembre de 2025.

4.2. SITUACIONES QUE SUSTENTAN LA ADICIÓN

La presente adición, por un valor de $6.022.578,00, al contrato de obra COP-SAMC-100-2025, cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GALDAMEZ SECTOR ROSA DEL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU-884 DE 2024", se considera procedente y necesaria en virtud de que el contrato en mención fue adjudicado por un monto de $93.977.422,00, inferior al valor previsto en el convenio interadministrativo, el cual ascendía a $100.000.000,00. Esta diferencia generó un saldo de $6.022.578,00 que corresponde a recursos efectivamente aportados por el Departamento de Cundinamarca en el marco del Convenio, y que no fueron comprometidos en el proceso de adjudicación contractual. De acuerdo con el concepto emitido por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, mediante radicado ICCU-S-2025-0005895 del 26 de agosto de 2025, dichos recursos pueden ser adicionados al contrato, siempre que se destinen a ampliar el alcance de las obras, se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal y la modificación se formalice mediante Otrosí publicado en la plataforma SECOP II.

En concordancia con lo anterior, es pertinente precisar que la adición proyectada no supera el límite establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pues corresponde únicamente al 6,4% del valor inicial del contrato, garantizando así el cumplimiento del marco legal aplicable.
Desde el punto de vista técnico, la adición permitirá ejecutar aproximadamente 9 metros adicionales de mejoramiento vial, sumados a los 111 metros inicialmente proyectados, lo cual optimiza la inversión y aumenta el impacto positivo de la obra. Esta ampliación en el alcance del contrato redundará en una mayor cobertura de la intervención, mejorando las condiciones de transitabilidad,

seguridad y conectividad de la vía, lo que a su vez contribuye al desarrollo socioeconómico de la comunidad beneficiaria en la vereda Galdámez – sector Rosa del Páramo.

Adicionalmente a esto, se solicita una adición en tiempo de quince (15) días calendario, con el fin de ejecutar de manera adecuada y completa las obras derivadas de la presente adición económica, asegurando que la ampliación del alcance contractual se materialice en condiciones de calidad, continuidad y eficiencia.

De esta forma, la adición solicitada resulta procedente y necesaria, no solo porque asegura el aprovechamiento integral de los recursos públicos comprometidos por el Departamento de Cundinamarca, sino también porque se ajusta a los principios de planeación, economía y eficiencia que rigen la contratación estatal, orientando los recursos disponibles a la satisfacción de las necesidades previamente identificadas en el proyecto radicado y aprobado en el Banco de Proyectos Departamental, en coherencia con el objeto del convenio interadministrativo y del contrato de obra.

5. JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO.

La modificación contractual al contrato de obra COP-SAMC-100-2025, derivado del Convenio ICCU-884 de 2024, se fundamenta en la necesidad de adicionar la suma de $6.022.578,00 y un plazo de quince (15) días calendario, con el fin de ejecutar las obras adicionales derivadas del saldo no comprometido del convenio interadministrativo. Esta adición, que representa únicamente el 6,4% del valor inicial del contrato, se encuentra amparada en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el concepto emitido por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU (Radicado ICCU-S-2025-0005895 del 26 de agosto de 2025), en el cual se establece la viabilidad de adicionar contratos derivados de convenios siempre que se cumplan los requisitos de justificación técnica, disponibilidad presupuestal y formalización mediante Otrosí.

La ampliación en el alcance permitirá ejecutar aproximadamente 9 metros adicionales de mejoramiento vial, que se suman a los 111 metros inicialmente proyectados, lo cual se traduce en una intervención más amplia y en una mejor optimización de los recursos públicos. Con ello, se garantiza una mayor continuidad en la vía, se reducen los puntos críticos sin intervenir, se incrementa la durabilidad de la estructura construida y se mejoran las condiciones de transitabilidad y seguridad para los usuarios. Asimismo, la adición contribuye al fortalecimiento de la conectividad de la zona rural con el casco urbano, facilitando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios básicos y la movilidad de la comunidad de la vereda Galdámez – sector Rosa del Páramo, con un impacto directo en la calidad de vida y en el desarrollo económico local.

En este orden de ideas, la modificación contractual solicitada es plenamente procedente y necesaria, pues no solo permite la ejecución total de los recursos comprometidos por el Departamento de Cundinamarca, sino que también asegura que la obra tenga un mayor alcance en beneficio directo de la comunidad. La adición proyectada incrementa la funcionalidad de la vía, garantiza una intervención más integral y coherente con las necesidades identificadas en el territorio y fortalece la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De esta manera, se da cumplimiento a los

principios de planeación, economía y responsabilidad que orientan la contratación estatal, al tiempo que se maximiza el impacto social y económico del proyecto en la vereda Galdámez – sector Rosa del Páramo.

Para efectos de calcular el valor correspondiente a la adición solicitada se emplearon los valores unitarios ofrendados por el contratista dentro del proceso de selección, así como las cantidades adicionales que se indican en el balance anexo.

5.1 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:

Es preciso indicar que el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que: "*(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (…)*.", motivo por el cual se realiza la verificación del cumplimiento de este postulado legal, mediante la verificación del valor inicial y los salarios mínimos a la fecha adicionados en el contrato, que permiten señalar que el tope máximo legal aún no se ha alcanzado, ni se sobrepasa con la presente adición, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$93.977.422,00	66.02	SMMLV 2025
50% EXPRESADO EN SMMLV	$ 46.988.711,00	33,01	SMMLV 2025
PROYECCIÓN ADICIÓN No.1 SMMLV 2025	$ 6.022.578,00	$ 4,23	SMMLV 2025

Por lo anterior, en mi calidad de supervisor, manifiesto que la presente solicitud de adición no supera el 50% del valor inicial del contrato, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

6. SUSTENTO JURIDICO DE LA PRORROGA Y ADICION ECONÓMICA.

Según el Consejo de Estado, la prórroga de los contratos puede definirse como:

> *(…) la modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que,* ***una vez prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo***.[2] *(Negrilla fuera de texto)*

[2] *Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil., Concepto 2252 del 2 de diciembre de 2015. C.P Álvaro Namen Vargas.*

De acuerdo con lo señalado por la misma Corporación, este tipo de modificación sobre los contratos estatales puede realizarse con base en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, ya que según dicha disposición la regla general sería la libertad en las estipulaciones contractuales.

> *". De modo que de esas disposiciones se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3° a 5° de la misma ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración.* ***La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato****. (…)"*[3]

Conviene resaltar adicionalmente algunas precisiones que el Consejo de Estado ha realizado sobre la prórroga de los contratos estatales, pues a partir de estas afirmaciones es posible señalar que la prórroga, entre otros aspectos, debe caracterizarse principalmente por ser un medio idóneo para realizar el interés público:

> *"(…) (i) La prórroga de tales contratos no resulta en sí misma ilegal ni inconstitucional, porque la ley no la prohíbe, salvo en casos especiales, ni es contraria a los principios y las normas constitucionales que regulan el ejercicio de la función pública y, en particular, la contratación estatal. (ii) Sin embargo, resulta inconstitucional e ilegal la prórroga automática de tales contratos, porque desconoce varios principios que deben regir la actividad contractual de todas las entidades, órganos y organismos del Estado, como la libre competencia económica, el derecho de las personas a participar en la vida económica de la nación en igualdad de condiciones, la prevalencia del interés público, el deber de planeación y los principios de selección objetiva, economía, transparencia y eficiencia, entre otros. (iii) Por las mismas razones, resultarían inconstitucionales las normas y las cláusulas que permitan la prórroga sucesiva e indefinida de esta clase de contratos, esto es, sin que se limite el número de veces que se pueden prorrogar ni su duración máxima. (iv) En cualquier caso, tanto la decisión de prorrogar un contrato celebrado por alguna entidad pública, como la duración y las condiciones de dicha prórroga, deben obedecer a lo previsto en la ley y a la aplicación de los principios generales que gobiernan la contratación estatal, entre ellos el de planeación. En general, la prórroga puede celebrarse si constituye en cada caso concreto un medio adecuado, eficiente, económico y eficaz para realizar el interés público o general involucrado en el respectivo contrato, y no exclusiva ni principalmente para favorecer al contratista respectivo. (v) En consecuencia, la prórroga de cualquier contrato celebrado por una entidad estatal debe obedecer, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino en especial, a la decisión consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad pública*

[3] *Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia 3171 del 24 de agosto de (2005). C.P Dario Quiñonez*

contratante, luego de evaluar las opciones jurídicas que tenga a su disposición en cada caso, con relación a la terminación o a la continuación del contrato, y de analizar cuidadosamente sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras (…)".[4]

Como se observa del análisis precedente, por regla general la prórroga se perfecciona de la misma manera en que lo hace el contrato, con la existencia del acuerdo de voluntades y su elevación a escrito, además, como ya se mencionó, debe hacerse antes del vencimiento del plazo inicial.

6. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:

Modificar la Cláusula Cuarta – Plazo del Contrato, la cual fue estipulada inicialmente en un término de TRES (3) MESES y posteriormente se adicionó por el término de quince (15) días calendario. En atención a las necesidades expuestas y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, se amplía el plazo de ejecución en quince (15) días calendario más, estableciendo como nueva fecha de terminación el **veintiuno (21) de septiembre de 2025**.

Modificar la Cláusula Quinta-Valor del Contrato, la cual fue estipulada inicialmente como *"El valor del contrato es por la suma de noventa y tres millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos veintidós pesos ($93.977.422) M/cte incluido IVA…"*. En atención a las necesidades expuestas y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, se modifica de la siguiente manera *"El valor se incrementa en seis millones veintidós mil quinientos setenta y ocho pesos ($6.022.578), para un valor total de cien millones pesos ($100.000.000) M/cte incluido IVA."*

De igual manera, se aclara que según lo especificado en la Cláusula Décima-Garantías el contratista debe ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. Por lo tanto, se deberán ajustar los montos y vigencias de las garantías de cumplimiento, estabilidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual, conforme al nuevo valor y plazo del contrato.

Atentamente

MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

Proyectó: Daniela Muñetones-Contratista Obras Públicas
Revisó: Marcos Giovanni Garzón- Sec de Obras Públicas

[4] *Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil., concepto 2252 de 2 de diciembre de 2015. C.P Álvaro Namen Vargas.*

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GALDAMEZ SECTOR ROSA DEL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU-884 DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. COP-SAMC-100-2025

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA: INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.940.240-9 | **INTERVENTOR: ALCALDIA DE SUBACHOQUE**

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2025

INTEXE S.A.S.

		ESPECIFICACIONES		CONTRATO DE OBRA No COP-SAMC-100-2025					MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No.	**ÍTEM DE PAGO**	**GENERAL**	**PARTICULAR**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**Cant**	**Vr Unidad**	**Vr Total**	**Cant**	**Vr Parcial**	**Dif. Cant**	**Valor Diferencia**
1	600,4			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,69	$ 54.600,00	$ 474.474,00	1,28	$ 69.888,00	9,97	$ 544.362,00
2	630,4			CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,03	$ 680.070,00	$ 21.102.572,10	4,23	$ 2.876.696,10	35,26	$ 23.979.268,20
3	630,7			CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	27,36	$ 518.900,00	$ 14.197.104,00	0,02	$ 10.378,00	27,38	$ 14.207.482,00
4	671,1			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	18,44	$ 615.700,00	$ 11.353.508,00	2,47	$ 1.520.779,00	20,91	$ 12.874.287,00
5	640,1			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.383,96	$ 6.954,00	$ 23.532.057,84	7,27	$ 50.555,58	3.391,23	$ 23.582.613,42
				SUBTOTAL OBRA				**$ 70.659.715,94**		**$ 4.528.296,68**		**$ 75.188.012,62**
				AIU 33%				**$ 23.317.706,26**		**$ 1.494.337,90**		**$ 24.812.044,16**
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 93.977.422,20**		**$ 6.022.634,58**		**$ 100.000.056,78**
				AJUSTE				**-$ 0,20**		**-$ 56,58**		**-$ 56,78**
				VALOR TOTAL				**$ 93.977.422,00**		**$ 6.022.578,00**		**$ 100.000.000,00**

CONTRATISTA: **INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS**
NOMBRE: CAMILO ALBEIRO TORRES PEÑA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDIA DE SUBACHOQUE
ING. MARCOS GEOVANY GARZÓN
SUPERVISOR DE CONTRATO